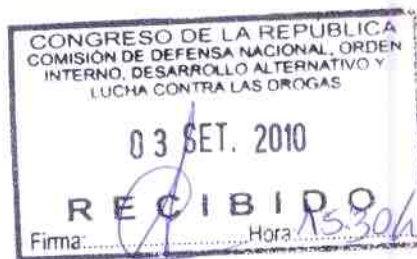




Congreso de la República



CARGO

Lima, 03 de septiembre de 2010

Oficio N° 42-2010-CR / LAGR

Doctor

Wilder CALDERON Castro

Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso de la República
Presente.-

Ref.- Proyecto de Ley N° 4261/ 2010, Ley del Presupuesto Fiscal año 2011.

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. señor Presidente, para expresarle mi cordial saludo e informarle que no podré asistir a la sesión de la Comisión de Defensa programada para este martes 07 de setiembre del 2011, debido a que me encontraré fuera del país en comisión del servicio, representando al Presidente de la República en mi calidad de Primer Vicepresidente.

Tengo conocimiento que en dicha sesión estarán presentes la señora Ministra de Economía, el Ministro de Defensa y del Interior con la finalidad de tratar los alcances de las Disposiciones Finales Décimo Octava, la Décimo Novena y Vigésima del proyecto de ley del presupuesto Fiscal del año 2010; disposiciones con las cuales se estaría vulnerando las remuneraciones, el Régimen previsional y la suspensión de las escuelas de formación del personal militar y policial. Asimismo se tratará el tema de la reducción del presupuesto de Defensa. Por lo expuesto, quiero dejar sentado mi preocupación y desazón.

Al respecto llama la atención, que justamente para analizar esta problemática el Gobierno nombró una Comisión de Alto nivel, cuyo encargo es analizar entre otras consideraciones la problemática pensionaria y salarial de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, trabajo hasta donde tengo entendido comprendía varios ejes temáticos. Dicha Comisión es presidida por el Primer Ministro e integrada por los titulares de Defensa, Interior y Economía, formando parte de la misma el "Acuerdo Nacional", y como asesor técnico se nombró al señor Ricardo Herrera especialista en el tema. Lo preocupante es que dicha Comisión ha emitido su informe correspondiente o en su defecto algún tipo de informe previo, por lo que resulta pertinente que la Comisión de Defensa solicite información correspondiente y se curse invitación a los miembros de dicha Comisión de Alto Nivel.

Con respecto la Disposición Final Décimo Octava se les estaría recortando la posibilidad de que el personal militar y policial puede acceder a otros tipos de percibos y con ello paliar sus bajos sueldos, resultando esto totalmente discriminatorio ya que dicha disposición no es de aplicación a otros servidores del Estado y por lo tanto se transgrede el principio de la igualdad de las personas. Esta disposición resulta un tanto contradictorio, por un lado hay consenso sobre las bajas remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero con por el otro lado se les margina el que puedan mejorar sus ingresos.

Con respecto a la Disposición Final Décimo Novena, se pretende vulnerar el sistema pensionario existente para los uniformados bajo la sustentación de la primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Cabe resaltar que ese cambio Constitucional tiene nombre propio, es referido exclusivamente al sistema pensionario del DL 20530. Según la Constitución, mediante ley expresa se fija que entidad del Estado administra los regímenes pensionarios. En el caso de las FFAA y PNP, es la Caja de Pensiones la que lo administra. El problema se presenta cuando normas y disposiciones de otros regímenes pensionarios se pretende sean también de aplicación para las FFAA y PNP. Es importante resaltar que el personal de las FFAA y PNP no son empleados Públicos, por su status tienen ley propia. Así tenemos que la Ley N°28175 “Ley Marco del empleo público” en su artículo III.- “Ámbito de la Aplicación” excluye al personal militar y policial la categoría de empleado público. Por su naturaleza y modalidad de trabajo el personal militar y policial marca diferencias con otros servidores del estado. También es necesario considerar que estos derechos otorgados tienen el tratamiento de los derechos adquiridos.

Con respecto a la Disposición Final Vigésima; que suspende por dos años el ingreso a las escuelas de formación de las FFAA y PNP; estaría afectándose el número de efectivos de las instituciones, al respecto la cantidad de personal de las FFAA y de la PNP son determinados en los planes institucionales estratégicos de largo plazo los cuales son aprobados por sus respectivos sectores. Es por ello que llama la atención que se trate de modificar el número de los efectivos mediante una Disposición Final en la ley del presupuesto y no mediante una ley expresa. Se destaca que la ley del Presupuesto debe circunscribirse solo a la asignación de recursos para los para los diferentes sectores y instituciones del Estado, más no así legislar sobre otras que no necesariamente son presupuestales. Asimismo se debe tener en cuenta que la vigencia de este tipo de leyes tiene solo vigencia de un año. El pretender normar sobre aspectos relacionados a la preparación del personal militar afecta los planes institucionales y con ello el misionamiento de nuestras instituciones que salvaguardan la Defensa y la Seguridad del Estado.

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Determinar las amenazas resulta ser el principio para la evaluación de la asignación de los recursos para el sector Defensa, lo cual debe ser contrastado y reforzado por los lineamientos de la Política de Defensa Nacional. Esta claridad resulta vital para conceptuar adecuadamente la asignación de los recursos; los potenciales riesgos pueden convertirse en amenazas cuando se incorpora el ingrediente de la intencionalidad expresa. Aquí cabe preguntarnos ¿Quién define el rol de las Fuerzas Armadas y quien define sus presupuestos? Mediante esta Disposición Final sería actuando al revés, el presupuesto estaría definiendo el rol y el tamaño de las FFAA, sin que se tome en consideración las potenciales amenazas reales que debemos enfrentar. No debemos condicionar las amenazas en virtud del presupuesto. Cabe resaltar que actualmente tanto las FFAA como la PNP, presentan déficits en sus efectivos actualmente para el cumplimiento de las misiones asignadas. Por lo tanto cerrar las escuelas de formación agravarían mucho más esta situación.

Agudizando más esta problemática de las FFAA podemos observar en el presupuesto Fiscal para el año 2011, una disminución en el mismo con respecto a otros años, lo cual va a afectar significativamente la gestión y labor del Sector Defensa, como es una reducción en las horas de vuelo e instrucción de pilotos, mantenimiento y reparación de equipos, entrenamiento de las diferentes fuerzas operativas, prestaciones de salud. Cabe resaltar que los presupuestos anuales asignados para el Defensa representan en sí decisiones de carácter político cuya magnitud en términos cuantitativos y cualitativos, estará definida necesariamente en función de la escala de prioridades del Gobierno Central, con lo cual podemos corroborar que la Defensa es un sector relegado.

Otra interrogante que se debe poner en debate durante esta sesión es tocar el tema de la Caja de Pensiones Militar Policial, su reflotamiento y sostenibilidad vía un aumento de las aportaciones.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted señor Presidente tenga a bien considerar estos cuestionamientos que he presentado con la finalidad que le sean formulados a la Ministra de Economía durante su presentación ante la comisión de Defensa.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente



Luis A. GIAMPIETRI Rojas
Congresista de la República